

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN. FUNDA.

Señora Jueza:

TOMÁS PALACIO, abogado, en representación de FORD ARGENTINA S.C.A, en los autos caratulados “**URUEÑA SONIA EVANGELINA C/LOPEZ EDUARDO RAUL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS**” Expte. N° **176/19**, a V.S. respetuosamente digo:

I. INTERPOE RECURSO DE APELACIÓN.-

Que en concordancia con los artículos 766 y Cctes. del Nuevo Código Procesal Civil Y Comercial, vengo a interponer recurso de apelación contra la sentencia de fecha 27/12/2023, por causar gravamen irreparable a mi representada.

II. FUNDA RECURSO DE APELACIÓN.-

A. PRIMER AGRAVIO: La Responsabilidad Solidaria.

El delito cometido por el entonces empleado de la codemandada es de imposible conocimiento (tanto para su empleadora como para mi mandante). Ello porque no se puede sospechar de un esquema que se manifiesta de forma perfectamente oculta. Véase que el ardid del Sr. López, como bien identifica el A QUO, se llevó a cabo de forma hermética. A los ojos de las empresas aquí demandadas, la cliente dejó la concesionaria con un presupuesto y sin haber manifestado intención de continuar con el proceso de reparación. Esto, lejos de ser una anomalía es una reacción posible y previsible de los consumidores que se encuentran en aquella situación.

Es correcto que, para mantener la garantía, las reparaciones (todas) deben ser realizadas con repuestos oficiales, en talleres habilitados por Ford (que es quién la concede). De todas formas, los consumidores, con la autonomía de decisión que poseen, muchas veces optan por acudir a talleres no homologados con el fin de acceder a algún beneficio particular (como bien pueden ser precios más económicos). Por ello, no eleva ningún tipo de sospecha a las empresas codemandadas que la Sra. Urueña no haya decidido continuar las reparaciones conforme el presupuesto emitido; pues bien podría haber optado por otra alternativa, por el motivo que ésta hubiera considerado más apropiado, sin que ello levante o deba levantar sospecha alguna.

Tal como es plasmado por el A QUO en la sentencia de grado, el Sr. López luego continuó sus tratativas en forma oculta, con comunicaciones telefónicas personales (Llamadas y/o WhatsApp); solicitando en última instancia que el vehículo de la actora sea dejado para su reparación en el “domicilio de su abuela”. El actuar del Sr. López claramente se desarrolló no solo en aberrante violación de su mandato y sus tareas, sino que además se consumó fuera del establecimiento de la concesionaria codemandada; solicitando y recibiendo un depósito de dinero en su cuenta personal por parte de la actora -quien a su vez tampoco tuvo la mínima diligencia de advertir lo anómalo que resulta aquello-.

De esta forma, y sin que exista prueba en autos que contraríe lo aquí manifestado, el A QUO cometería el error de interpretar la no detección del ilícito como una falta al saber o deber saber los potenciales perjuicios que podrían suceder durante la prestación del servicio. En efecto, bajo esta lectura del criterio de la previsibilidad del perjuicio, no existiría perjuicio no previsible; puesto que hasta el más hermético delito debería haber sido previsto, y por ende excitaría los citados institutos legales que habilitan la extensión de la responsabilidad. Esta parte considera que la previsibilidad del perjuicio se manifiesta, por ejemplo, en deficiencias en la

prestación del servicio como podría ser una reparación insatisfactoria, o una deficiencia en la información; no así en la esquemática y encubierta defraudación que un empleado pudiera cometer. Más aún cuando, como se ha dicho, esta resultó oculta y hermética para las empresas codemandadas (conforme ha quedado demostrado por la prueba de autos).

El Sr. López planeó y ejecutó su cometido con el fin de lucrar de forma ilícita e impropia, en perjuicio tanto de la actora (quien habría recibido un servicio de reparación deficiente), como de las aquí codemandadas (que ejercen el legítimo negocio de venta, post-venta y garantía de vehículos de la marca Ford, y se vieron privadas de la oportunidad de negocio).

De esta forma queda más que claro que esto no constituye una mera inobservancia de la concesionaria, y por extensión, de la fábrica terminal. Se trata lisa y llanamente de un obrar deliberadamente doloso del Sr. López, que nada tiene que ver con la legítima prestación del servicio de reparación que ofrecen las codemandadas, y que contempla el Artículo 40 LDC a la hora de establecer la extensión de la responsabilidad.

Es decir, la comisión del delito de defraudación no constituye un servicio, y como tal, no es pasible de extender la responsabilidad por aquel a lo largo de la cadena de producción del mismo; máxime cuando la cadena de producción no sabía y no podría haber sabido de su comisión.

Entonces, si bien el sentenciante menciona la responsabilidad por el hecho del dependiente, no surge de ninguna norma que aquella extensión de responsabilidad sea -a su vez- extensible a la cadena de producción. Véase que el mismo artículo 40 habla de la responsabilidad por el vicio o riesgo en la prestación del servicio, no así de cualquier tipo de responsabilidad emanante de un integrante de la cadena de producción (como podría ser el supuesto de la responsabilidad por el hecho

del dependiente). Afirmar lo contrario no solo atentaría contra la interpretación literal del mencionado artículo, sino que también tendría implicancias de enorme magnitud, abriendo la puerta para que cualquier tipo de responsabilidad de un eslabón de la cadena de producción (sea por el riesgo o vicio de la cosa o servicio, o cualquier otra) sea extendida a lo largo y ancho de la misma.

Demás está decir que esto configuraría un amplísimo estándar de extensión de responsabilidad, que repercutiría negativamente sobre todo el mercado; dado que cualquier empresa -bajo la eventualidad de que uno o varios de sus proveedores o compradores cometan delitos o incurran en supuestos de responsabilidad- produciría con costos más altos o directamente elegiría no producir por el potencial daño económico que los litigios pudieran producir.

Consecuentemente, solicito V.E. entienda inaplicable la extensión de la responsabilidad solidaria pautada por el Artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y exima de toda responsabilidad a Ford Argentina S.C.A.

b. SEGUNDO AGRAVIO: La Cuantificación De Los Daños.

1. Disminución del Valor Venal.

Conforme surge de la sentencia en pugna, el A QUO ha hecho lugar al daño por disminución del valor venal que incluyó la actora en su demanda. Fundamenta y esgrime que la existencia de este se ve acreditada por los dichos del perito ingeniero, quién ha opinado en tal sentido.

De todas formas y pese a los dichos del auxiliar de la justicia, la cuantificación de esta supuesta desvalorización del valor venal es arbitrariamente fijada según el **10% sobre el valor de venta de un rodado similar modelo en el mercado**

actual (conforme listado de precios de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina).

Sin embargo, y como es acertadamente opinado por la doctrina y jurisprudencia, la disminución del valor venal **debe calcularse -lógicamente- tomando como punto de partida el valor que podría haber conseguido el damnificado en el mercado, previo al hecho dañoso en contienda.**

A pesar de esto, el sentenciante hace claro su razonamiento cuando explica que: *“Ahora bien, para el cálculo de este rubro, tengo en consideración que los deterioros en el vehículo se presentan en su carrocería y chasis lo que finalmente terminó afectando en su estructura, por lo que estimo que existió una desvalorización equivalente al 10% en aquel”*.

Esto es incorrecto. El sentenciante no debería calcular la disminución del valor venal sobre el precio promedio de venta de un vehículo similar en el mercado, porque el estado del vehículo antes de los hechos que motivan la presente contienda no era un estado *promedio*. El vehículo de la actora acababa de sufrir un siniestro de magnitud considerable, que lo dejó en el estado que posteriormente motivó el presupuesto de reparación emitido por la codemandada.

Es así que, incluso si las aquí codemandadas fueran responsables de una disminución del valor venal, aquella disminución debería ser calculada sobre el valor del vehículo averiado. Ello puesto que, en primer lugar, las codemandadas

no fueron responsables por el siniestro o su impacto económico sobre el valor de reventa del vehículo; y segundo, en tanto deviene evidente que un vehículo en estado de avería jamás podría venderse por una suma cercana al promedio de venta que recomienda el listado de ACARA que se emplea en la sentencia de grado.

En este mismo sentido, cabe resaltar que el A QUO condena solidariamente a las aquí codemandadas a indemnizar “(...) *en concepto de daños materiales* (y según el presupuesto emitido por la codemandada), *la suma de \$79.250 (pesos setecientos noventa mil doscientos cincuenta) a la actora, que se estiman a la fecha de hecho*”. **De esta forma se configura una duplicidad de rubro de condena al no descontar la suma impuesta en concepto de daño emergente (actualizado) -que representa lógicamente el costo de la reparación de la avería del vehículo- a la base de cálculo de la disminución del valor venal.**

Entonces, a los fines del cálculo de la condena, el A QUO incurre en una evidente contradicción al entender NO reparado el vehículo a los efectos del cálculo del daño emergente; y SI reparado el vehículo a los efectos del cálculo de la disminución del valor venal. La realidad de los hechos es que, aún si existiera la disminución del valor venal establecida por la sentencia, aquella debería practicarse sobre el estado en el que ingresó al taller; pues ese es el valor que podría verse visto

afectado por la calidad de las reparaciones efectuadas por el mecánico José Cabezas.

Consecuentemente y para evitar la duplicidad del rubro de condena, solicito V.E. readecúe el cálculo de la disminución del valor venal practicado por el A QUO, y sustraiga de su base el monto actualizado que las codemandadas deberían pagar en carácter de daño emergente (actualizado a la fecha en la que se pague la condena).

2. Daño Extrapatrimonial / Daño moral.

La cuantificación del daño extrapatrimonial que realiza el A QUO no es adecuada. En primer lugar, entiende que el daño moral, atento a las circunstancias del caso, no requiere mayor prueba y cita jurisprudencia al respecto; en segundo lugar, de forma arbitraria, dispone la concesión de la totalidad del monto reclamado por la actora en su demanda; y finalmente practica dos cálculos de actualización de dicha suma, para elevarla al monto final de \$1.064.517. Monto que supera todos los otros rubros de daños concedidos.

El sentenciante reconoce la dificultad de la fijación de un precio a los padeceres anímicos de la actora y también reconoce que la actora “(...) *no hizo ningún aporte que permita determinar específicamente qué bien o actividad resultaría gratificante, de manera de poder contar con pautas más específicas a la hora de cuantificar este rubro*”. Pero lo que no

reconoce o menciona es que la actora tampoco aporta elementos para determinar la profundidad o intensidad de su padecer.

Viendo la argumentación que practica la parte actora en el texto de su demanda, podrá advertir V.E. que la alusión al daño moral es tan fugaz como genérica. No aporta detalle alguno mas que la frase “(...) *he padecido un sinfín de angustias y malestares, a más de que manejo todos los días para mi trabajo un vehículo que estimo inseguro, lo que genera malestar psicológico*”. Es así que siquiera de lo mencionado aporta elementos de prueba o mayores precisiones que permitan inferir de forma alguna la magnitud de su padecimiento extrapatrimonial/moral.

Desconcertantemente, y sin mejores elementos, el A QUO, entiende adecuadamente justificada la suma reclamada en su totalidad; con lo cual no practica cautela alguna frente a la orfandad probatoria del rubro. Véase que, a pesar de que la existencia del daño pueda ser presumida por la prueba de diversos hechos dentro de un reclamo, su cuantificación y liquidación forman parte de la responsabilidad y diligencia de la parte que la pretende; la cual bajo ningún criterio debería verse exenta del debido esfuerzo epistemológico que aquella implica.

De lo contrario, aquello que se estaría implicando es que el daño moral o extrapatrimonial -al menos en el ámbito que aquí nos concierne- puede ser justipreciado con absoluta prescindencia del impulso probatorio de la parte, una vez que aquel se entiende producido. Esto, por supuesto, sería aberrante

al *onus probandi* que imponen las normas y el espíritu del proceso que en autos se cursa. Pues si bien es dable tomar en cuenta la *carga dinámica de las pruebas* en el contexto del fuero consumeril; en este caso, quien se encuentra mejor situado para ilustrar y probar sus padecimientos anímicos y psicológicos, es nada más y nada menos que la propia actora. La sentencia del A QUO en este aspecto refleja una prescindencia absoluta de la participación de la parte actora -que es meramente reducida al rol de fijadora de un límite infranqueable- en relación al referido rubro de daño, haciendo un gran esfuerzo argumentativo con el fin de justificar lo que a llanas es una arbitrariedad, carente de todo sustento en los hechos del caso.

Aún peor es el hecho de que, dentro del referido esfuerzo argumentativo, supletorio de la actividad de la parte, el juzgado de grado emplea la teoría de los placeres sustitutivos, que se encuentra mundialmente criticada por su tratamiento desigual de las personas, en función de sus ambiciones y posibilidades económicas. Es con esta teoría que se intenta justificar la concesión del total del monto pretendido por la actora, estableciendo que su actualización es equiparable al valor de un viaje con estadía y traslado incluido a Córdoba (con lo cual adjunta un enlace a la página web de la agencia de viaje Despegar). Esto es algo que a toda luz podría y debería haber realizado la parte actora y no el propio sentenciante, de oficio. Resulta también incongruente el pretender aplicar la teoría de los placeres sustitutivos en ausencia de los dos elementos

necesarios que hacen a su lógica interna. Esta teoría requiere del conocimiento de la profundidad y magnitud del sufrimiento, y de forma colateral, de los placeres que los contrarrestarían. Digo colateral porque, como es entendido por la doctrina, la magnitud del padecimiento se encuentra vinculada inexorablemente a las experiencias, calidad de vida y resiliencia del damnificado.

Aquello que resulta muy controvertido de esta teoría es que las personas más aventajadas económicamente suelen tener un umbral de sufrimiento más bajo, o placeres sustitutivos mas onerosos; por lo que afecta indudablemente la igualdad en el otorgamiento de “justicia” de cara a aquellos que menos tienen.

Es por esto que las cortes alrededor del mundo aplican con mucha cautela la susodicha teoría; y solo cuando existen elementos que permiten el normal funcionamiento de su lógica interna; es decir, el conocimiento de la subjetividad de la actora (por lo menos en la extensión y profundidad que habilita un proceso contencioso).

Sin embargo y, como ha quedado demostrado, la actora *ab initio* abandona todo esfuerzo probatorio sabiendo, o debiendo saber que aquello resulta parte integral de su diligencia; la cual no puede ni debe ser cubierta de oficio por el Juzgado.

De todas formas, esto no termina allí; puesto que, en la sentencia, casi a punto seguido de la comparación entre el viaje a Córdoba y el monto máximo actualizado a la fecha, el A QUO impone una segunda actualización del monto, con un interés del

6% anual; llegando así al MILLON SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE. Es decir que: sacando la arbitraria concesión del 100% del monto inicialmente reclamado por la actora, el monto es traído al presente (presuntamente mediate la Tasa Activa del Banco Nación, que arroja número similares, cercanos a los \$850.000) y luego aquel monto actualizado es nuevamente sometido a una actualización anual del 6% desde la fecha del hecho. Esto simplemente no porta sustento alguno.

Si la suma pretendida por la actora representa un límite infranqueable a lo que el A QUO puede otorgar, entonces su conversión a valores actuales representa un límite a la capacidad dispositiva de la sentencia; razón por la cual esta parte no comprende la posterior actualización anualizada de dicha suma. No solo se estaría duplicando la operación con dos tasas o estándares diferentes, sino que además se estaría elevando injustificadamente el monto de condena.

De allí que sorprende al suscripto que el daño moral, originalmente estimado en \$200.000,00 ascienda hoy a la suma de \$1.064.517,00; colocándolo solo algunos miles de pesos por debajo del rubro de desvalorización del valor venal. Esto, sorprendentemente dentro del contexto de manifiesto abandono del rubro a su suerte por parte de la actora. Con lo cual el sentenciante no solo es arbitrario al fijar el monto de condena por daño extrapatrimonial, sino que además lo eleva hasta representar casi el cincuenta porciento del total de la condena.

Es sino en virtud de estos argumentos que solicito a V.E. la inmediata reducción de la cuantificación del rubro, ajustándolo a derecho en función de la normativa y estándares vigentes.

c. TERCER AGRAVIO: Base Regulatoria.

La base regulatoria en la sentencia de grado asciende a \$3.192.694 (pesos tres millones ciento noventa y dos mil seiscientos noventa y cuatro), lo cual nuevamente, resulta desconcertante si tomamos en cuenta que el monto total de la condena, con valores actualizados a la fecha de su emisión asciende a \$2.491.258,72 correspondientes a: 1) Daño emergente \$324.810,72; 2) Disminución del Valor Venal por \$1.101.931; 3) Daño extrapatrimonial por \$1.064.517.

De esta forma solicito V.E. reduzca y readecúe la base regulatoria de la sentencia conforme los argumentos que he listado en los previos agravios, así como también para el hipotético caso en que no sean acogidos, acorde a la propia lógica de la sentencia.

d. CUARTO AGRAVIO: Honorarios Regulados.

En adición a su consecuente recalculado, en virtud del agravio precedentemente expuesto, vengo por el presente a apelar los honorarios del Dr. Alberto Daniel Moreno y el perito Pablo Daniel Impellizzere por altos, solicitando su reducción en función de las normas y estándares vigentes.

III. MANTIENE RESERVA DE CASO FEDERAL.-

Para el hipotético y remoto caso que V.S. no hiciera lugar al recurso de apelación, y no tuviera en cuenta las manifestaciones realizadas en el presente, mantengo expresa reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

pues se estarían conculcando los derechos de propiedad y de defensa en juicio de mi mandante.

IV. PETITORIO.

Atento lo expuesto solicito:

1. Se tenga por presentado el recurso de apelación en tiempo y forma.
2. Eventualmente se haga lugar al mismo, revocando y modificando la sentencia de grado conforme la inteligencia de los argumentos aquí expuestos.

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA.

Firmado digitalmente por

Dr. Tomás Palacio

M.P. 10.125 L°P F°625

Casillero n°20-39360185-0